

## Estados Unidos, los Derechos Humanos y América Latina

En esta misma columna expusimos hace pocos días (el 22 de febrero, bajo el título de "Carter y América Latina", algunos datos y elementos de juicio tendientes a mostrar que, si bien no existe desde luego ningún motivo fundado para suponer que el gobierno de James Carter se proponga promover virajes radicales, de esencia, en la orientación general de la política latinoamericana de los Estados Unidos, sí parece razonable prever que el nuevo presidente modifique de manera sensible —y en algunos casos quizás hasta un poco espectacular— la postura norteamericana ante ciertos gobiernos de la región. En particular, ha habido una serie de signos (y ahora empieza a haber también algunos hechos concretos) indicativos de que Carter desarrollará con respecto a algunos regímenes militares de derecha de América Latina una política claramente opuesta a la que en su momento aplicaron Nixon y Ford. Puede darse el caso, pues, de que determinados generales llegados al poder con la ayuda de los últimos dos ocupantes de la Casa Blanca, u otros anteriores, se vean desplazados de él debido (entre otros factores) a la hostilidad del actual. Está en discusión, desde luego, hasta qué punto pesa en estos cambios la preocupación de Carter (y de quienes presionan o influyen sobre él) por los derechos humanos, y cuál es la parte que debe atribuirse a cálculos más friamente políticos sobre la conveniencia o no para los Estados Unidos de que esos regímenes excesivamente "duros" sean remplazados por otros un poco más flexibles (y con mejor imagen). En todo caso, parecería que están soplando algunos vientos nuevos...

Hace pocas semanas, el Departamento de Estado confirmó, lo más diplomáticamente posible pero sin dejar lugar a equívocos, que el coronel chileno Jaime Lavín, de visita a los Estados Unidos, había acordado repentinamente su estadia por sugerencia de sus anfitriones. Dicho más crudamente: le "aconsejaron" que se fuera de regreso a Santiago antes de lo previsto. El motivo: dicho oficial es un torturador. Debe subrayarse que Lavín, además de experto en esas "técnicas", es formalmente un diplomático de muy alta jerarquía: ocupa, en efecto, el puesto de director general de la cancillería chilena. El tercer hombre en la escala del Ministro de Relaciones Exteriores.

El miércoles de la semana pasada, según un despacho de la Associated Press, volvió a registrarse una situación del mismo género. Los "damnificados" fueron en esta ocasión dos altos oficiales del ejército uruguayo, el mayor Nino Gavazzo y el coronel José Fons. Según el Consejo de Asuntos Hemisféricos, el gobierno norteamericano les negó a ambos la visa de entrada a los Estados Unidos debido a que "están implicados en la tortura de presos políticos". La noticia no ha sido desmentida por el gobierno uruguayo, que, por el contrario, ni siquiera permitió su difusión en el país.

Por esos mismos días, era recibido en

Washington con significativa cordialidad un político a quien los gobernantes (militares) de su país acusan de "filocomunista". Se trata del salvadoreño José Napoleón Duarte, líder de la Democracia Cristiana y aspirante en las elecciones de 1972 a una presidencia que el general Arturo Armando Molina le arrebató mediante el fraude y la violencia. Con respecto al Salvador, como a otros países, la política norteamericana parece no ser todavía unívoca: mientras los estrategos del Pentágono apoyan francamente a la ultraderecha (el congresista Koch citaba hace poco un informe en el sentido de que, a partir de diciembre pasado, el agregado militar norteamericano en San Salvador patrocinó calurosamente la candidatura del general Romero), mientras que en el Departamento de Estado predominarán los partidarios de una apertura. El mismo fenómeno se registra en otros países latinoamericanos.

El viernes pasado, el secretario de Estado Cyrus Vance informó en el Congreso de Washington que, por instrucciones del presidente Carter, los gobiernos de Uruguay y Argentina cesarán de recibir ayuda militar de los Estados Unidos, o la verán drásticamente reducida, como señal de inconformidad de este país por las violaciones a los derechos humanos cometidas por esos regímenes. Se registra, pues, la paradoja de que se le niegue ayuda económica, y aún de que se le impida el ingreso a los Estados Unidos, a oficiales que hace aún pocos años —quizás no más de algunos meses— viajaron precisamente a ese país, o a la zona del Canal de Panamá, para seguir cursos de contrainsurgencia (tortura incluida) costeados por el Tesoro norteamericano. Para los militares rioplatenses, el viraje cartesiano representa sin duda alguna una irritante bofetada, y aun una traición. No deja de resultar también paradójica, en otro ámbito, que Washington aparente darle tan bruscamente la espalda a un hombre que, como Videla, encabeza en el seno de su propio régimen a una tendencia "moderada" en lucha abierta con los "ultras". En esta misma columna destacábamos el viernes pasado, precisamente, el hecho de que Videla goza en el exterior del apoyo de quienes creen que él resulta, por lo menos de momento, la única alternativa viable frente a la extrema derecha. Tal es evidentemente el sentido de la declaraciones formuladas hace pocos días por el presidente venezolano Carlos Andrés Pérez. Y tal es también el sentido de la política (discretísima es lo menos que puede llamársela) de la URSS con respecto al régimen de Buenos Aires. No sólo las fuentes soviéticas evitan incluir a la Argentina entre los países latinoamericanos bajo regímenes fascistas, sino que incluso los partidos comunistas de las naciones vecinas, cuando reclaman por la libertad de los presos políticos del continente, se refieren a los de una buena decena de países (desde Chile hasta Haití, desde Paraguay hasta Nicaragua), pero sin mencionar a la Argentina.